

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS**



**“DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN
SEXUAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2015 – 2016”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

TESISTA:

Bach. PABLO GARAY, David

ASESOR:

Dr. PONCE E INGUNZA, Félix

HUÁNUCO – PERÚ

DICIEMBRE 2017



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 201-2017-DCATP-UDH
Huánuco, 04 de diciembre de 2017

Visto la Resolución N° 063-2017-DCATP-UDH de fecha 05 de junio de 2017 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **"DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2015 - 2016"**, presentado por el Bachiller David PABLO GARAY;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 12° del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

Que, mediante Resolución N°:587-2015-R-CU-UDH de fecha 29 de mayo de año 2015 se aprobó el ciclo se Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2017, el Dr. Felix Ponce e Ingunza Asesor del Proyecto de Investigación **"DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2015 - 2016"**, aprueba el informe final de la Investigación;

Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo el Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 316-2013-R-CU-UDH del 25 de abril de 2013 y la facultad contemplada en la Res. N° 571-2013-R-UDH;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGNAR al Jurado Calificador para examinar el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, Bachiller David PABLO GARAY, para obtener el Título Profesional de ABOGADO por la modalidad de ciclo se Asesoramiento para la tesis profesional; a los siguientes docentes:

Abg. Hugo Peralta Baca	: Presidente
Abg. Hugo Vidal Romero	: Secretario
Abg. Wilder Leandro Hermosilla	: Vocal



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 201-2017-DCATP-UDH
Huánuco, 04 de diciembre de 2017

Artículo Segundo.- Señalar el día viernes 22 de diciembre de 2017 a horas 10:00 a.m. dicha Sustentación, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Uladislao Zevallos Acosta Dr. D.
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
MA. FERNANDO GARCINO BARRUETA
DIRECTOR DEL C.A.T.P.

DISTRIBUCIÓN: Vice. Rect. Académico, Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad..f. Exp. Interesado, archivo

**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

En la ciudad de Huánuco, siendo las... 10.00 horas del día... 22 del mes de diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en el Salón de Simulación de Audiencia los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N°201-2017-DCATP-UDH del 04 de diciembre de 2017, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis del Graduado **David PABLO GARAY** el postulante al Título de Abogada, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

JURADOS CALIFICADORES

PUNTAJE

Abg. Hugo peralta Baca	Presidente	<u>12</u>
Abg. Hugo Vidal Romero	Secretario	<u>12</u>
Abg. Wilder Leandro Hermosilla	Vocal	<u>12</u>

CALIFICATIVO : 12 Doce
En números En letras

RESULTADO : Aprobado por Unanimidad

Abg. Hugo Peralta Baca
 Presidente

Abg. Hugo Vidal Romero
 Secretario

Abg. Wilder Leandro Hermosilla
 Vocal

DEDICATORIA

A DIOS todopoderoso creador supremo de la humanidad, por darme vida, salud y conducirme por el camino de la justicia, de la equidad, la tolerancia y la práctica de valores.

A mis queridos padres Alejandro Pablo Dimas y Hermelinda Garay Campos, quienes siempre me han transmitido sus valores de esfuerzo y sacrificio para conseguir mis metas que siempre me he propuesto alcanzar.

A mi esposa Vanessa Atanacio Ríos, por su apoyo moral e incondicional durante mi formación profesional y laboral. Gracias por estar siempre a mi lado y ser mi compañera fiel de toda la vida.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad de Huánuco, mi alma mater,
por haberme acogido en sus aulas y haberme
formado profesionalmente.

A mi asesor de tesis, por sus sabias
instrucciones técnicas y a mis maestros de la
Universidad, por brindarme sus enseñanzas y
compartir sus experiencias adecuadas para
culminar mis estudios de abogacía.

A la abogada Nadia Kezi Lavado Loarte por su
gentil apoyo en mi formación profesional y por
sus consejos de perseverancia para terminar mi
trabajo de investigación.

ÍNDICE

	Pág.
Portada.....	1
Dedicatoria.....	2
Agradecimiento.....	3
Resumen.....	6
Introducción.....	8

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema.....	10
1.2. Formulación del problema.....	14
1.2.1 Problema general.....	14
1.2.2 Problemas específicos.....	15
1.3. Objetivo general.....	15
1.4. Objetivos específicos.....	15
1.5. Justificación de la investigación.....	16
1.6. Limitaciones de la investigación.....	16
1.7. Viabilidad de la investigación.....	17

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación.....	18
2.2. Bases teóricas.....	20
2.3. Definiciones conceptuales.....	40
2.4. Hipótesis.....	41
2.4.1. Hipótesis general.....	41
2.4.2. Hipótesis específicas.....	41
2.5. Variables.....	41
2.5.1. Variable independiente.....	41
2.5.2. Variable dependiente.....	41
2.6. Operacionalización de variables.....	42

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo y nivel de investigación.....	43
3.1.1. Enfoque.....	43
3.1.2. Alcance o nivel.....	43
3.1.3. Diseño.....	44
3.2. Población y muestra.....	44
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	48
3.3.1. Para la recolección de datos.....	48
3.3.2. Para la presentación de datos.....	49
3.3.3. Para el análisis e interpretación de los datos.....	49

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Procesamiento de datos.....	50
4.2. Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis.....	61

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Contrastación de los resultados del trabajo de investigación.....	63
--	----

CONCLUSIONES.....	67
-------------------	----

RECOMENDACIONES.....	68
----------------------	----

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	69
---------------------------------	----

Anexos

- Matriz de consistencia (Anexo 1)
- Cuestionario (Anexo 2)

RESUMEN

La presente investigación: “Despenalización del Aborto en Casos de Violación Sexual en el Ordenamiento Jurídico Peruano, Provincia de Leoncio Prado 2015 – 2016”, tiene como objetivo principal determinar y analizar los fundamentos técnicos y jurídicos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

Esta investigación permite conocer la importancia que tiene la mujer para decidir libremente si interrumpe o no su embarazo que fue producto de una violación, es decir, la decisión de continuar con su embarazo debe ser libre, respetando el derecho a la maternidad y a su sexualidad reproductiva que el Estado debe garantizar y brindar los medios adecuados para practicarse un aborto cuando se traten de hechos de embarazos no deseados como consecuencia del abuso sexual.

Por lo tanto, nuestra legislación debe modificar el artículo 119° del Código Penal y prohibir la punibilidad del aborto cuando el embarazo resulta de un acto de violación sexual, en la medida que si bien es cierto los derechos fundamentales del concebido y de la mujer embarazada se encuentran reconocidos por la Constitución; sin embargo, estos derechos no son absolutos, pues corresponden equilibrarse entre sí de acuerdo a nuestra realidad, pues si damos una observancia absoluta al derecho a la vida del feto representaría una anulación de derechos fundamentales de la mujer, tales como el derecho a la salud, el derecho a la libertad sexual y reproductiva, a la planificación familiar, y a la realización de un proyecto de vida, entre otros.

Palabras clave: Libertad sexual y reproductiva, libre decisión.

ABSTRACT

The present investigation: "Decriminalization of Abortion in Cases of Sexual Violence in the Peruvian Juridical Order, Province of Leoncio Prado 2015 - 2016," has as main objective to determine and analyze the technical and legal foundations to decriminalize the abortion in cases of rape.

This investigation allows to know the importance that the woman has to decide freely if she interrupts or not her pregnancy that was the product of a violation, that is, the decision to continue with her pregnancy should be free, respecting the right to motherhood and her reproductive sexuality that the State must guarantee and provide the adequate means to perform an abortion when dealing with unwanted pregnancies as a consequence of sexual abuse.

Therefore, our legislation must amend article 119 of the Criminal Code and prohibit the punishability of abortion when the pregnancy results from an act of rape, to the extent that although the fundamental rights of the pregnant woman and the pregnant woman are true they are recognized by the Constitution; However, these rights are not absolute, because they correspond to each other according to our reality, because if we give absolute observance to the right to life of the fetus would represent an annulment of fundamental rights of women, such as the right to health , the right to sexual and reproductive freedom, family planning, and the realization of a life project, among others.

Keywords: Sexual and reproductive freedom, free choice.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación constituye un esfuerzo cuestionador de la situación jurídica que vienen atravesando las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual que tras el resultado de la agresión fatalmente resultaron embarazadas.

Estoy consciente que cuestionar el derecho a la vida es un tema incómodo y delicado, y que además la vida humana es un dilema que fue desarrollado desde muchas ciencias y disciplinas dedicadas a desentrañar su complejidad.

Sin embargo, la justicia para las mujeres víctimas de una violación y como consecuencia tuvieron un embarazo no deseado, se deben adoptar las medidas legislativas que apoyen la decisión de abortar libremente o respetar si desean continuar con su embarazo, esto se debe a que cada día fallecen mujeres a raíz de la mala práctica de un aborto en lugares clandestinos, con falta de higiene y profesionalismo para el mismo, todo esto por la falta de ayuda y protección del Estado a mujeres víctimas de una violación.

Debemos saber que no es posible determinar con exactitud si los derechos son o no son inherentes al ser humano. Lo que sí está claro es que por ética se debe respetar las libertades y mantener los derechos es necesario para promover la vida, pues eso hace nuestra vida cada día mejor, permite una convivencia más justa y reduce el abuso. Por ello, no es extraño que surjan algunos conflictos constantes siempre que se analiza el tema de la vida humana desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

Por eso resulta importante analizar todas las vertientes implicadas en ésta polémica, considerando como prioridad los derechos de la mujer y en particular su derecho de libre decisión respecto a lo que acontece en su propio cuerpo y

las consecuencias en su vida posterior, así como la incursión de ésta al ámbito laboral y económico.

Esta problemática social tan compleja de los derechos adquiridos desde el momento de la concepción contra los derechos que una mujer tiene a decidir sobre su cuerpo; es indudablemente controvertido en la medida en que el estudio del aborto consiste sólo en la explicación dogmática de las disposiciones penales que lo regulan. Además, debemos tener en cuenta que estar en contra del aborto por violación sexual, viola los derechos constitucionales de las mujeres como el respeto de la dignidad de la persona, fin supremo de la sociedad, igualdad, al libre desarrollo y bienestar, así como el derecho a elegir el número de hijos a tener.

Legalizar el aborto es aceptar el derecho a la libertad reproductiva más importante que el derecho a la vida que tiene el feto; de ahí que nuestra propia Constitución reconoce la autonomía de la persona, en el artículo 2° inciso 1, señalando que a las mujeres como sujeto de derecho les corresponde decidir sobre su propia vida, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia, de modo que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo por violación y aceptar la maternidad o no, es una opción de vida que corresponde a su fuero interno y el Estado a través de una sanción penal no debería interferir en la vida privada de la mujer.

En ese sentido, la decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida es un derecho que se encuentra protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad que no puede ser objeto de injerencia por autoridad pública o por particular alguno.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema

En el mundo la forma más extendida de vulneración de derechos humanos contra la mujer es la violencia de género, siendo una forma de discriminación por razón de sexo, que afecta severamente su salud física, mental y por ende su calidad de vida.

Nuestro país tiene las más altas tasas de denuncias por violaciones sexuales que evidencia que este flagelo social es un fenómeno extendido en todos los sectores económicos, grupos de edad y espacios urbanos y rurales. Esta problemática en nuestro país es alarmante, ya que según los últimos estudios nuestro país está ocupando el puesto número 16 en el mundo por tener mayores denuncias por violación sexual en América del Sur. Además estas cifras continúan siendo alarmantes pues el 78% de víctimas de violación sexual son menores de edad y el 5 % de ellas quedan embarazadas.

El aborto es un problema local, regional y nacional, ya que el aborto está calificado por el Código Penal como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, salvo el aborto terapéutico; sin embargo, despenalizar el aborto en casos de violación sexual sigue siendo una problemática latente de derechos humanos que afecta particularmente a las víctimas.

Para tener un mayor panorama de esta problemática, es preciso evidenciar algunas cifras relevantes. Por ejemplo, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2016), evidenció que el 5,9% de mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad por parte de su cónyuge o conviviente en algún instante de su vida. Asimismo, según las estadísticas del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el 42% de las mujeres fueron violadas en sus domicilios o en otros espacios que eran considerados como seguros. Además, en la mayoría de casos el agresor fue un familiar de la propia víctima y el 75% de las mujeres violadas eran menores de edad.

Esta preocupante información evidencia que la violación sexual es un fenómeno extendido en nuestro país; aunque sabemos que existe una cifra oculta de criminalidad, ya que por la naturaleza del delito, las víctimas no suelen denunciar.

Ahora bien, en nuestro país entre el 10 y 30% de mujeres sexualmente abusadas, como consecuencia algunas han resultado embarazadas. Por ello, si admitimos que el 5% de estas féminas resultan con un embarazo no deseado, estaría ocurriendo que en nuestro país se podrían estar dando 35,000 embarazos producto de violación al año.

Sin embargo, no todas de estas mujeres embarazadas producto del abuso sexual deciden abortar, aunque las víctimas que deciden hacerlo

se encuentran frente a un hecho que penaliza el aborto y las obliga a seguir adelante con un embarazo forzado que perjudica su salud mental y coloca en riesgo su integridad física al exponerse a un aborto inseguro.

El embarazo por causas de una agresión sexual se convierte en un segundo hecho de violencia sexual, que no es ejercida por el agresor sino por el propio Estado, quien no sólo desprotege a la mujer frente al primer hecho, sino que desconociendo el sufrimiento y su dolor psíquico de la víctima, le impone legalmente la continuación de un embarazo no esperado.

Además, la obligación de llevar un embarazo producto de una violación atenta contra la autonomía y la dignidad de las mujeres, a las que el Estado no trata como sujetos de derecho sino como medios para proteger la vida o la salud de otro ser. Por eso, es necesario reconocer que el embarazo forzado por causas de violación sexual tiene además graves secuelas en la salud física, ginecológica y mental en las víctimas.

Por ese motivo, en la presente investigación se sostendrá con argumentos técnicos y jurídicos para permitir la despenalización del aborto en casos de violación sexual, para que de esa manera la mujer desde su intrínseco derecho de libertad sexual y reproductiva pueda decidir de forma autónoma, libre e independiente si elige o no la maternidad como parte de su opción de vida.

Por su parte, en la provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco, las cifras de víctimas de violencia sexual son bastantes alarmantes pues según los indicadores las Fiscalías Penales de la región Huánuco se atendieron 6,591 casos de violencia sexual entre 2003 al 2016, la mitad de ellos en las provincias de Huánuco y Leoncio Prado y, más del 80% contra niñas y adolescentes.

Asimismo, de las 2,550 denuncias presentadas por violación sexual en Huánuco entre los años 2012 y 2015, el 66,8 % tuvo lugar en las jurisdicciones de Huánuco y Leoncio Prado. Justamente en ese tiempo se reportaron 984 denuncias en Huánuco y otras 720 en la provincia de Leoncio Prado. En Huánuco, el 42,3 % de las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes, mientras que en la provincia de Leoncio Prado lo fueron el 54,3 % (GAMARRA HERRERA y otros, 2015).

En ese aspecto es sustancial fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado y la sociedad civil, incluidas las organizaciones sociales de base y las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, para evitar que la violencia sexual continúe ocurriendo y por ende disminuir los embarazos no deseados.

Debemos saber que si no se resuelve este problema, en el futuro puede repercutir un peligro para la vida de la mujer, por ello, el Estado debe preservar la vida de ésta y tomar medidas legislativas urgentes que permitan la despenalización del aborto en situaciones de violencia

sexual, a razón de que permitir esta decisión no significa obligar a la víctima practicarse el aborto, si no respetar su libertad sexual y reproductiva.

Permitir a la madre interrumpir su gestación por estas razones y fundamentos es escalar un peldaño ético y legal, pues el derecho a elegir sobre su embarazo es también decirle sí a la vida. Es permitirle decidir su vida.

Si bien es cierto, y debemos reconocer que al despenalizar el aborto en situaciones de violación sexual no se detendrán las mismas -que si se lograría con una buena educación sexual integral, fomentando la dignidad por y para la mujer y reduciendo las enormes brechas sociales- pero sí estoy seguro que el Estado proveería mayor justicia en las víctimas de abuso sexual.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos para la despenalización del aborto en casos de violación sexual, en el ordenamiento jurídico peruano, provincia de Leoncio Prado 2015 - 2016?

1.2.2. Problemas específicos

- a) ¿Cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la despenalización del aborto en casos de violación sexual en la administración de justicia de la provincia de Leoncio Prado?

- b) ¿Cuántas mujeres víctimas de embarazos no deseados, producto de una violación sexual, tuvieron que continuar con su embarazo y dar a luz por temor a una sanción penal en la provincia de Leoncio Prado?
- c) ¿Qué alternativas de solución se deberían proponer al Congreso de la República para modificar el artículo 119° del Código Penal, respecto a la despenalización del aborto por violación sexual?

1.3. Objetivo general

Determinar y analizar los fundamentos técnicos y jurídicos para la despenalización del aborto en casos de violación sexual, en el ordenamiento jurídico peruano, de la provincia de Leoncio Prado 2015 - 2016.

1.4. Objetivos específicos

- a) Analizar e identificar los criterios técnicos y jurídicos que sustenten la despenalización del aborto en casos de violación sexual en la administración de justicia de la provincia de Leoncio Prado.
- b) Identificar la cantidad de víctimas de violación sexual embarazadas que tuvieron que continuar con su gestación y dar a luz por temor a una sanción penal en la provincia de Leoncio Prado.
- c) Proponer alternativas de solución al Congreso de la República para modificar el artículo 119° del Código Penal, respecto a la despenalización del aborto en casos de violación sexual.

1.5. Justificación de la investigación

Esta investigación se ha justificado por su relevancia social, además es importante, porque las víctimas de violación sexual que quedaron embarazadas podrán decidir desde su derecho intrínseco a la libertad sexual y reproductiva de continuar o elegir el aborto como solución para sus embarazos no deseados.

Además, debemos saber que anteriormente había esfuerzos por aprobar la despenalización del aborto, pero sin mucho éxito por haberse tomado como base que el derecho a la vida, es un derecho fundamental y absoluto, entonces a través de este trabajo se demostrará la importancia del reconocimiento del aborto en casos de violación sexual, pues es un derecho fundamental de las mujeres que están reconocidos en la esfera de los derechos reproductivos y en la vinculación de la jurisprudencia internacional en torno al derecho al aborto, particularmente en casos de violación.

1.6. Limitaciones de la investigación

Por la naturaleza de la investigación que abarca estudios referidos al aspecto de la intimidad personal y familiar, es éste precisamente un factor limitante puesto que el acceso a la información testimonial de las víctimas tuvo algunas restricciones e impedimentos para su recopilación. En ese sentido, las limitaciones que se presentaron en la presente investigación fueron:

- Falta de acceso a la información completa de datos estadísticos por parte de las instituciones involucradas.
- Desconfianza de parte de las víctimas de abuso sexual para brindar información.
- Insuficiente tiempo para la ejecución del trabajo de investigación y escasez de docentes universitarios dedicados exclusivamente a temas de investigación.

1.7. Viabilidad de la investigación

La presente investigación fue viable, en la medida que el problema planteado es un tema social y de interés público, además fue posible debido que se contó con los recursos financieros necesarios y los materiales logísticos disponibles, así como la disponibilidad de amplia revisión bibliográfica para poder desarrollar la investigación de acuerdo al cronograma establecido.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

A continuación, se muestran los antecedentes que permitieron sustentar el presente trabajo de investigación.

1. Jorge Humberto Sánchez Pérez (2011) en su estudio realizado en cuya tesis llevó por título: “Análisis del aborto derivado de casos de violación sexual dentro del modelo jurídico vigente en el Perú: Una aproximación desde los fundamentos filosóficos del artículo primero de la Constitución Política del Perú”, tuvo por finalidad explicar y describir el aborto procedente de asuntos de violación sexual, teniendo como objetivo traer a colación un problema común de la sociedad peruana, cuyo tratamiento implica tanto una responsabilidad con el estudio del propio modelo acogido como una cuestión constante, que nunca debe alejarse de las aulas de nuestras facultades de derecho. Su estudio era de tipo aplicado a nivel descriptiva - explicativa llegando a la conclusión que:

- a) El caso del aborto por violación sexual, es un caso que responde a múltiples transgresiones del derecho a la libertad, al ser ponderado el nivel de vulneración del valor libertad frente al nivel de vulneración del valor vida, la afectación del primero implicaría una jerarquía superior del mismo frente al segundo en el caso concreto, pudiendo concluir que la sanción penal del mismo sería de carácter inconstitucional.

2. Sandoval Manuel (2006) “El aborto en zonas andinas”, en su tesis para optar título de abogado, su conclusión fue que el Perú a nivel de Latinoamérica es el país que tiene mayor número de abortos, seguidamente esta Brasil con Argentina. Señaló que, por cada mujer que fallece por aborto hay 10 ó 15 mujeres que quedan incapacitadas para concebir o sufren de procesos crónicos dolorosos. Existe informes que sobre altas tasas de complicaciones por aborto entre las mujeres de las zonas urbano - marginales, que por miedo a las sanciones legales y personales no llegaron a un establecimiento de salud para solicitar tratamiento para sus embarazos.

3. Miriam Alicia Gran Álvarez (2004), en su estudio realizado: “Interrupción voluntaria de embarazo y anticoncepción, dos métodos de regulación de la fecundidad, Cuba 1995 - 2000”, tuvo por finalidad determinar los factores que condicionan la interrupción del embarazo en la población femenina cubana, llegando a la conclusión que:

a) El perfil que caracterizaron a las mujeres cubanas que utilizaron la interrupción del embarazo para regular su fecundidad se encuentran: la edad joven, el ser estudiante de nivel medio, la unión inestable, no prolongada y por ende, la no convivencia con su pareja, rasgos que suponen daños a la salud sexual y reproductiva de la población, con repercusiones sociales que pueden ser desfavorables.

4. Elisa Stephania Cevallos Villagómez, en su estudio realizado en la ciudad de Latacunga - Ecuador 2011, cuya tesis llevó por título: “La

despenalización del aborto en casos de violación por la implicación psicológica de la víctima", tuvo por finalidad establecer una reforma jurídica al código penal ecuatoriano, para permitir la despenalización del aborto en casos de violación. En dicho estudio se utilizó el tipo de investigación aplicada de nivel descriptiva - explicativa, llegando a la conclusión:

- a) Que de los dos grupos encuestados correspondientes a los fiscales y abogados en libre ejercicio; se establece que la mayoría de ellos están de acuerdo con el derecho que posee la mujer para decidir sobre su vida y salud reproductiva.
- b) Para estigmatizar en nuestra sociedad al aborto; según los encuestados, han influido concepciones de tipo ético-morales y religiosas, siendo estas últimas una verdadera fuerza para las autoridades; y para la sociedad en general.
- c) Que una mujer embarazada producto de una violación difícilmente estaría apta para procrear y criar un hijo o hija fruto de ese delito; ya que su estado psicológico influiría en la crianza y desarrollo de su hijo.

2.2. Bases teóricas

A continuación, detallaré las teorías en los que se sustenta el presente trabajo de investigación en el cual presentaré como se ha desarrollado el tratamiento del aborto en nuestra legislación, su regulación penal, los

derechos sexuales y reproductivos, los principios que justifican la intervención del derecho penal, generalidades del aborto, el bien jurídico protegido y las teorías fundamentales sobre los derechos humanos de la mujer.

2.2.1. Tratamiento del aborto en la legislación peruana.

En el artículo 2° de nuestra Constitución Política establece que toda persona tiene el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, tanto psíquica y física y también a su libre desarrollo y bienestar. Asimismo, le concierne a la persona elegir su plan de vida y desarrollar su personalidad acorde a sus intereses, aspiraciones y convicciones.

Por eso debemos saber que al penalizar el aborto por violación es una clara expresión de discriminación hacia las mujeres, ya que su objetivo es unidireccional, no existe otro caso en el que se disponga del cuerpo de una persona en contra de su voluntad, a su vez restringe el ejercicio de las libertades individuales que a toda persona asiste, y que más allá de proteger la vida, la pone en grave riesgo.

2.2.2. El aborto como delito tipificado en el Código Penal.

Desde la doctrina penal, el aborto es definido como la destrucción de la vida humana, producto de la concepción, dentro del claustro materno o por su expulsión prematuramente provocada. La muerte del concebido configura el delito al margen de si hay o no expulsión o si esta se produce dentro o fuera del vientre de la madre, solo así se logra

comprender de manera satisfactoria la consideración del aborto como delito contra la vida (CASTILLO ALVA, 2005)

El aborto se encuentra tipificado como delito en nuestro Código Penal, en el Capítulo de los delitos contra el cuerpo y la salud, que también se encuentra compuesto por el delito de homicidio y lesiones. Esta ubicación se da en función del bien jurídico que protege esta figura.

En nuestra legislación peruana la primera ley aprobada, con relación del aborto era el C.P de 1863, que lo sancionaba penalmente. El aborto por móvil de honor y el aborto consentido por la madre se consideraban atenuados. Este Código estuvo vigente hasta la entrada en vigencia del C.P de 1924, el mismo que estuvo vigente durante 67 años. Se sancionaban: el aborto propio, el aborto consentido, el aborto no consentido, el aborto perpetrado por profesionales, el aborto terapéutico y el aborto preterintencional. Años más tarde se promulgó el Código Sanitario de 1969 que determinó el marco jurídico de las relaciones en el campo de la salud. (MENDOZA CELINA, 1995)

En el ámbito jurídico el enfoque del conflicto de derechos ha desplazado al viejo debate, al tradicional debate sobre el aborto eugenésico, que estuvo casi exclusivamente centrado en el inicio de la vida y en la cuestión de la personalidad moral del feto. Este enfoque parte por reconocer que ningún derecho es absoluto, que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e integrales, que no están jerarquizados ni hay un orden de prevalencia prefijado para ellos.

En el aborto eugenésico que son aquellos casos de embarazos con malformaciones o taras incompatibles con la vida se encuentran involucrados derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida de la persona por nacer, el derecho a la libertad de decisión de la mujer, el derecho a la salud física y psíquica de la madre y el núcleo familiar.

2.2.3. La libertad de decisión de la mujer.

Se ha dicho que la libertad de la mujer es la clave para la emancipación de la sociedad. Sin embargo, hay que añadir que cualquier sociedad en la que la mujer no goza del debido respeto, igualdad de derechos, seguridad y libertad, se encuentra sometida por completo. Las mujeres exigen independencia económica, libertad para escoger y determinar su propio destino.

El derecho a una decisión libre y voluntaria sobre el cuerpo, tiene su fundamento en los derechos humanos como son: el derecho a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a la libertad de pensamiento, etc.

Todas las personas tienen diferentes creencias y opiniones, pero la aceptación de este pluralismo debería ser un requisito esencial en todas las sociedades democráticas, porque la construcción de consensos no choca con la libertad de los individuos para accionar a través de sus propias convicciones, teniendo como fundamento el respeto a la diversidad.

2.2.4. Principios rectores que justifican la tipificación del delito.

a) Principio de mínima intervención

Según este principio, el derecho penal debe intervenir solo en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando no se pueda resolver un problema o conflicto social con los otros sistemas de control extrapenales, pues el derecho penal no es un instrumento de control más, sino que, a causa de las consecuencias de su aplicación, deviene en un mecanismo especialmente problemático para los ciudadanos y la sociedad.

Este principio se expresa concretamente en los principios de subsidiariedad y fragmentariedad que orienta la labor de incriminación que lleva acabo el legislador penal, de modo que sólo las lesiones más intolerables a los bienes jurídicos más importantes deben sancionarse penalmente.

Es así que el referido principio supone ser un límite fundamental a las leyes penales, constituyendo que éstas sólo se justifican en la medida que sean esenciales e indispensables para lograr la vida en sociedad.

b) Principio de fragmentariedad

Este principio consiste en que el derecho penal no puede ser utilizado para prohibir todas las conductas, actualmente se presenta como una limitación de la punibilidad de las acciones. En pocas palabras, este principio señala que no se deben castigar todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino las más graves.

Este principio sirve como pauta para el legislador en aras de que este pueda determinar si determinados hechos punibles pueden transformarse en infracciones o no.

Así, por ejemplo, si bien la confianza en el respeto al patrimonio de otro es un bien jurídico elemental, el simple incumplimiento del pago de una deuda no puede ser reprimida penalmente. En el caso del patrimonio, solamente las conductas más intolerables, como el hurto y robo agravado, la apropiación ilícita, la estafa, se sancionan penalmente, pues sólo en estos casos el nivel de perturbación social amerita la intervención del Derecho Penal para devolver la confianza a la expectativa defraudada.

El derecho penal no está para proteger todos los bienes jurídicos de nuestra sociedad sino, sólo los más importantes. Si en toda situación donde existiría conflicto intervendría el ius puniendi del Estado, se correría el riesgo de paralizar toda la actividad social y económica del país; además, las personas no pueden vivir bajo la constante amenaza de una posible sanción penal, aparecería una inseguridad total en las personas. El sistema penal tiene en cuenta la forma en que se vulneró el bien jurídico protegido es por eso que especialmente se sancionan los delitos dolosos.

c) Principio de subsidiariedad

Este principio tiene una manifestación cualitativa y cuantitativa. En la parte cualitativa, la subsidiariedad simboliza que únicamente los bienes jurídicos más significativos pueden necesitar la intervención del Derecho

Penal. En este sentido, las acciones que cuestionan la vigencia de aspectos que no son esenciales para la constitución del sistema social no pueden repercutir una sanción penal, aun cuando se hallen generalizadas y no exista manera de reducir su tasa de incidencia con otros dispositivos de control.

Pero la subsidiariedad tiene además una expresión cuantitativa, ya que no podrá recurrirse al Derecho Penal si las acciones ilícitas se pueden controlar suficientemente con otros medios de control meno lesivos.

Debemos saber que si los mecanismos de control extrapenales pueden mantener en niveles tolerables determinadas acciones socialmente perturbadoras, entonces no habrá que cargar a las esferas de libertad de los individuos con amenazas penales. Sin embargo, esta subsidiariedad cuantitativa no debe llevar a la conclusión de que los diversos mecanismos de control cumplen una función similar.

Lo que sucede es que en determinados casos, los mecanismos de reacción no penales alcanzan empíricamente la función asignada al Derecho Penal (de prevención o de reestabilización), de manera que resultaría innecesario recurrir a los mecanismos de reacción penales.

2.2.5. Definiciones jurídicas del aborto y el bien jurídico protegido.

- a) Definición de Aborto:** Aborto proviene de la palabra latina abortus que significa: sin nacimiento o lo que también significa opuesto a nacer.

Nuestra legislación no define en qué consiste el aborto, sino que si castiga al que cause o provoque el mismo; sin embargo no es

impedimento para hacer una interpretación desde dos puntos de vista jurídico y médico.

Desde el punto de vista jurídico, se fundamenta en la muerte provocada del feto con o sin expulsión del vientre materno, sea que el embarazo provenga de fecundación natural o artificial. El detalle es que el sujeto pasivo es un feto durante la interrupción prematura del proceso de gestación para provocar la muerte de aquel.

Desde la óptica médica y específicamente ginecológica, se establece la diferencia entre aborto y parto prematuro. Esta noción es mucho más restringida que el médico legal, pues aquí el aborto es la muerte del producto de la concepción antes de ser viable. La viabilidad implica aptitud física para tener vida autónoma, es decir, para poder vivir fuera del vientre materno. Esta viabilidad está dada por los ciento ochenta días de duración del embarazo. A partir de esta fecha se habla ya no de aborto sino de parto prematuro.

Asimismo, se le ha considerado al aborto desde este punto de vista como la expulsión de un embrión o feto que pesa menos de quinientos gramos con edad gestacional aproximada de veinte a veintidós semanas completas o de ciento cuarenta a ciento cincuenta días completos. A partir de las veinte a las veintiocho semanas será considerado como un parto inmaduro.

De todas formas, el concepto legal es más amplio que el estrictamente médico porque en este caso se prescinde del resultado de las maniobras para la vida del feto, el aborto consiste en la muerte del feto, ya sea

como consecuencia de su expulsión violenta y prematura o por su destrucción en el vientre.

En definitiva, se puede definir el aborto como la interrupción del embarazo de una mujer debido a la muerte del feto causada por la madre o por un tercero, con o sin expulsión del seno materno. (Masaglia María, y Giménez Oscar, 2005, 2006)

b) El Bien Jurídico Protegido: La determinación de si estamos ante un bien jurídico digno de protección es importante saber para determinar la legitimidad de perseguir una conducta considerada delictiva, y tanto la legislación interna como internacional ya ha zanjado el tema: el concebido tiene derecho a la vida (VARSI ROSPIGLIOSI, 1995) y no es propio de un Estado de Derecho desconocer el derecho a la vida del concebido a partir del debate de si el concebido tiene o no la condición de persona. (ORE SOSA, 2010).

Sin embargo, como contrapartida las acciones legales que se intentan por dicha conducta antijurídica es nula comparada con el número de sentencias registradas. Esto nos demuestra la inutilidad del sistema que sanciona el aborto. Evidentemente el poder de represión y sanción del Estado no está dirigido contra la práctica abortiva; el tipo penal que castiga el aborto de alguna forma no cumple con ese requisito de estar asentado en la realidad.

2.2.6. Los Derechos Humanos

Con respecto a los derechos humanos (en adelante DH); HERRERA, Dalton; (1997) manifestó: “Entendemos por derechos humanos a la formulación histórica dentro de la etapa moderna de la cultura occidental, que recoge las experiencias básicas de la dignidad humana”.

Los DH son universales, son libertades y facultades que incluyen a toda persona, a través del cual se le garantiza una vida digna; que les corresponde a todas las personas, sin distinción alguna de sexo, etnia, raza, religión, lengua o cualquier otra condición.

Se puede mencionar que estas dos conceptualizaciones destacan, que el ser humano es el fundamento, motivo y razón de los derechos humanos; puesto que estos se basan en el respeto a la dignidad humana; proceso que ha venido representado en conquistas y que hacen referencia a todos los aspectos de la vida que se desenvuelven en la sociedad.

El Estado tiene la responsabilidad de respetar, garantizar y promover el ejercicio de los DH. Respetarlos significa no interferir en las áreas privadas de la vida individual; garantizarlos implica adoptar las medidas necesarias para lograr su satisfacción en la población, y asegurar la asistencia de determinados servicios.

En el plano particular, el Estado debe hacer respetar los DH propios, también se deben hacer respetar los DH de los demás, ya que, sin ellos sería imposible un desarrollo civilizado de personas y de pueblos, en el

que prevalezcan la libertad, el respeto al derecho del otro, la justicia, la equidad, la tolerancia y la solidaridad.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH), cuyo propósito fue de servir como norma aplicable para todos los pueblos y naciones, en dicha declaración se menciona que todos los seres humanos nacen libres y son iguales en dignidad y derechos.

En ese sentido, cada persona tiene el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, donde está prohibido la esclavitud, el castigo corporal y el trato degradante. Todas las personas deben gozar por igual de la protección de la ley, de la inviolabilidad y seguridad de su hogar, de la familia. El acusado de cometer un delito será tratado como inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial firme, se reconocen los derechos de libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de religión y de reunión pacífica.

Asimismo, se afirman los derechos de patrimonio y el de impartir y recibir instrucción, la libre elección del trabajo, el mismo que presentará condiciones favorables, salarios justos y protección frente al despido. En ese contexto, los derechos y libertades que se definen en la DUDH no deberán ser denegados a nadie bajo pretexto de raza, color, sexo, origen o condición.

Estos instrumentos legales, a su vez, sirvieron de base para ir mejorando y perfeccionando las leyes de las diferentes naciones, de ahí que en nuestra legislación peruana se haya perfeccionado leyes, y

códigos como por ejemplo: el de la Niñez y la Adolescencia, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, entre otras; leyes con las que nuestro Estado Peruano dispone la protección integral a la familia y la sociedad, siendo el propio Estado que debe garantizar el progreso integral y el goce pleno de los derechos en un marco de dignidad e igualdad.

2.2.7. El Aborto como Derecho Humano.

Los DH de las Naciones Unidas, por intermedio del Alto Comisionado se dieron orientaciones claras sobre cuándo se debe despenalizar el aborto, además, ha puesto énfasis que el aborto es un asunto de los DH. Es obligación de los Estados eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (en adelante CEDAW), en su Recomendación General N° 21, ha establecido que la decisión de tener hijos no debe estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno.

Además, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señaló en su artículo 6° inciso 1, que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

La Convención sobre los Derechos del Niño señaló que para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad y que los Estados parte reconocen que todo niño

tiene el derecho intrínseco a la vida; sin embargo, la Convención no estableció expresamente que el *nasciturus*, es decir el concebido pero no nacido, sea un niño y, como tal, titular de los derechos consagrados en el instrumento internacional.

La CIDH en el caso Artavia Murillo y otros, concluye que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino progresivo según su desarrollo.

En algunos Estados, se prohíbe el aborto; sin embargo, existe una excepción con la finalidad de proteger y salvar la vida de la mujer, como por ejemplo en casos de violación, incesto o deformación fetal. La mayor parte de los países tienen leyes más flexibles sobre el aborto, de tal forma que toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, así como también las razones económicas o sociales para que se permita dicho procedimiento.

Los órganos internacionales de DH señalaron que las leyes que penalizan el aborto son discriminatorias y un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Por ello, recomendaron que los Estados Parte supriman todas las normas punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos.

Estos organismos además solicitaron que los Estados permitan el aborto en ciertos casos, por ejemplo el CEDAW, en sus observaciones finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, 2014.

En el citado párrafo 36 podemos apreciar claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a su vida o la salud, o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El aborto debe ser legal seguro y accesible, esto es una postura propuesta en los compromisos políticos tomados por los Estados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo en el año 1994. Aquí los Estados reconocieron que el aborto en condiciones de riesgo es una importante preocupación de salud pública y se comprometieron a eliminar la necesidad de recurrir a abortos mediante servicios de planificaciones familiares integrales y mejores, reconociendo que, en los casos que el aborto no fuera contrario a la ley, debería practicarse en condiciones adecuadas.

2.2.8. La penalización del aborto y el acceso a los servicios de salud, es un modo de discriminación contra las mujeres.

El CEDAW señala que el impedimento de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales es discriminatorio.

Establece, además que las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan únicamente a la mujer y sancionan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones, son un obstáculo para el acceso de las mujeres a la atención de salud. Por lo que, el Comité ha

exigido a los Estados eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a un aborto. (Observaciones Finales sobre Perú, 2014)

Además, el Relator Especial sobre el derecho a la salud argumentó que las leyes que penalizan el aborto atentan contra la dignidad y libertad de la mujer al restringir gravemente su autonomía para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva.

Así también el CEDAW hizo una distinción entre legalizar el aborto en ciertos casos y eliminar todas las disposiciones punitivas, señalando que los Estados Parte deben legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto, amenazas contra la vida o la salud de la madre, o en casos de severa malformación fetal, así mismo facilitar a las mujeres el acceso a servicios posteriores al aborto que sean de calidad, especialmente en casos de complicaciones derivadas de un aborto en condiciones de riesgo.

2.2.9. Garantizar los derechos de la mujer exige el acceso al aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación.

En su jurisprudencia, el CEDAW solicitó a un Estado que analice su legislación con miras a la despenalización del aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de abuso sexual (Comité de Derechos Humanos, Observación General 28 sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, párr. 20., 2000).

El Comité de Derechos Humanos también solicitó a los Estados que entreguen información sobre el acceso a abortos sin riesgos para

mujeres que han quedado embarazadas como resultado de una violación (Observación General 28, párr. 11).

En sus observaciones finales, los órganos creados en virtud de tratados también recomendó que los Estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de una mujer (Comité de Los Derechos del Niño, 1999), y en casos de embarazos como consecuencia de una violación o incesto (Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3 (2012), CCPR/C/PAN/CO/3, 2008).

Concerniente a las excepciones a la prohibición del aborto para proteger la vida o la salud de la mujer. El Comité de Derechos Humanos señaló que el sufrimiento mental causado a la víctima a continuar con un embarazo no deseado equivalía a un trato cruel e inhumano, asimismo, negar el aborto a una mujer, a sabiendas que su bebé moriría poco después de nacer, le provocaría sufrimiento mental, lo que también constituye un trato cruel.

El Protocolo de Maputo del 2005 sobre los derechos de las mujeres en África exhorta a los Estados parte a tomar todas las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos reproductivos de las mujeres, autorizando el aborto médico en casos de asalto sexual, violación, incesto y cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud física y mental de la madre o la vida del feto.

El denominado Protocolo de Maputo, es el primer tratado de derechos humanos que exige expresamente a los Estados que aseguren el acceso al aborto en ciertas circunstancias. Este Protocolo, es una norma legal sin precedentes para los derechos de las mujeres africanas, extiende y refuerza los derechos consagrados en otros instrumentos de derechos humanos. El Protocolo otorga a las mujeres una amplia gama de derechos económicos y de bienestar social.

2.2.10. Los servicios de aborto legal deben ser Seguros, Accesibles, Económicos y de Buena Calidad.

En los Estados donde el aborto es legal, se debe poner en práctica los procedimientos para hacer que estos servicios sean seguros y accesibles a las mujeres sin discriminación.

El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) estableció que el derecho a la salud exige servicios de salud, incluidos los servicios de aborto legal, que estén disponibles y que sean accesibles, aceptables y de buena calidad. El Comité de los Derechos del Niño recomendó que los Estados garanticen el acceso al aborto en ambientes de seguridad y a servicios posteriores al aborto, independientemente de si el aborto es en sí legal.

En muchos países, las leyes sobre el aborto ya fueron legalizadas; sin embargo, la legalización no va acompañada de reglamentos claros para implementar la ley. En esas circunstancias, los servicios de salud algunas veces se niegan a proporcionar servicios legales. Por lo tanto, la

reforma legal por sí sola no es suficiente para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos.

En ese contexto, el CEDAW ha señalado que el marco legal para el acceso al aborto debe contemplar un mecanismo de toma de decisiones de modo rápido, con miras a limitar al máximo los posibles riesgos para la salud de la mujer gestante, que la opinión de esta sea tomada en cuenta, que la decisión sea debidamente motivada y que se tenga derecho a recurrirla.

2.2.11. El aborto en casos de violación sexual.

La penalización del aborto hasta la actualidad es una forma de discriminación para la mujer; y ha mancillado el derecho de libertad que poseen las víctimas de violaciones, combatir esta forma de discriminación obstaculizada, representa no simplemente luchar por la libertad de la mujer, si no luchar sin descanso para aproximarnos, cada día más a la supremacía de la libertad y la democracia; puesto que siempre fueron los prejuicios sociales y religiosos los que han estado en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

De ahí que, en nuestra legislación existe un vacío entre lo que contempla el CP, con lo que establece el artículo 6° de la Constitución Política de Perú que establece: La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconociendo el derecho de las familias y de las personas a decidir. De esa manera, el Estado debe asegurar las

transmisiones de educación y las informaciones adecuadas y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Como es de verse nuestro Estado tiene el deber de reconocer a las mujeres el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva; es decir para decidir cuándo y cuántos hijos tener; de modo que cuando se refiere a cuándo y cuántos hijos tener significa que la mujer pueda elegir el momento cuando desee embarazarse y en caso sufra un abuso sexual y se embarace también puede optar si desea practicarse o no un aborto; es decir se puede dar la pauta para establecer que una mujer que fue víctima de una violación, obviamente por el sólo hecho de ser abusada, puede decidir si continua o no con el proceso de gestación.

Legalizar el aborto por cuestiones de violación, es una buena opción, ya que si analizamos los puntos buenos de su legalización, seguramente disminuirían las muertes maternas y neonatales por los diferentes abortos que se realizan de forma clandestina y sin la mínima seguridad e higiene que la intervención médica amerite.

Al no estar legalizado el aborto, muchas personas llevan a cabo este procedimiento de manera informal, sometiéndose en su mayoría a ser atendidas en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de salud. Corriendo el riesgo de atentar contra su salud y hasta su vida.

Esto conlleva a que personas inexpertas e inescrupulosas que, con la única finalidad de poder lucrar a costa de la salud y hasta de la propia vida, someten a sus pacientes a estas prácticas ilegales.

Desde luego que, recurrir al aborto no debe ser legal para cualquier situación, ya que eso contemplaría, que muchas mujeres recurran al aborto sin motivo alguno; a lo que me refiero es que se debe legalizar en casos especiales, como son cuando se compruebe la existencia de una violación sexual; porque este acto trae consigo muchos trastornos psicológicos a la madre como por ejemplo la depresión puesto que este acto destroza a la víctima en los aspectos más profundos e íntimos de su identidad y su dignidad; así como también cuando el feto se encuentra con malformaciones que no le permitirían llevar una vida sana y digna o cuando esté en peligro la vida de la mujer.

En nuestra legislación peruana, el aborto es un delito de acción penal pública sea este consentido o no; salvo el aborto terapéutico, e inclusive impone rigurosas penas a los profesionales que lo practican.

En consecuencia, resulta éticamente inaceptable que un acto delictivo como la violación; que terminó en un embarazo no planeado, convierta la fecundación en una obligación jurídica para la mujer, cuyo incumplimiento puede ser sancionado, al igual que su victimario, haciendo que un acto ilícito se convierta para la población femenina en la peor condena.

2.3. Definiciones conceptuales

- **Despenalizar:**

Significa dejar de sancionar como delito una conducta, en este caso el aborto, castigada por la legislación penal peruana usualmente con penas de cárcel.

- **Aborto:**

Interrupción del embarazo en cualquier época de la gestación antes de que el feto llegue a su total desarrollo. Además el delito de aborto es la acción intencional que provoca la interrupción del embarazo generando la muerte del feto en el vientre de la madre o logrando su expulsión.

- **Violación sexual:**

Agresión de tipo sexual que se produce cuando un sujeto activo tiene acceso carnal hacia otra persona, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas.

- **Libertad reproductiva:**

Derecho que tiene toda persona para tomar decisiones reproductivas libres y responsables sobre su cuerpo, es decir, es aquel derecho que brinda la capacidad de decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos.

2.4. Hipótesis

2.4.1. Hipótesis general

- H₁.** Los fundamentos técnicos y jurídicos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual son el derecho a la libertad sexual y la autodeterminación reproductiva que amparan y protegen la decisión de abortar frente a embarazos no deseados, provincia de Leoncio Prado, 2015 - 2016.

2.4.2. Hipótesis específicas

- H₁.** El derecho a la libertad sexual y reproductiva es el fundamento técnico jurídico constitucional que ampara a las víctimas de violación sexual frente a vulneración de sus derechos reproductivos que las afectan al momento de decidir abortar.
- H₂.** Las víctimas de violación sexual con embarazos no deseados vienen siendo desamparadas por parte del Estado al momento que las victimas deciden optar por interrumpir su embarazo.
- H₃.** La modificación del artículo 119° del Código Penal permitirá despenalizar el aborto e influenciará significativamente para reducir la mortalidad materna y neonatal en las víctimas de violación sexual.

2.5. Variables

2.5.1. Variable independiente: Violación sexual

2.5.2. Variable dependiente: Despenalización del aborto

2.6. Operacionalización de variables (Dimensiones e Indicadores)

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES		
VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE (Violación sexual)	1. El Aborto	a. Situación actual b. Regulación jurídica
	2. Excepción al delito del aborto.	a. Aborto terapéutico b. Riesgo en la salud o la vida de la mujer
	3. Despenalización del aborto por violación.	a. Iniciativa legislativa ciudadana b. Modificatoria del artículo 119° del Código Penal
	4. Problemas socio-económicos de las víctimas.	a. Falta de recursos económicos b. Interrupción del proyecto de vida personal
VARIABLE DEPENDIENTE (Despenalización del aborto)	1. Abuso sexual	a. En adolescentes b. En jóvenes y adultos
	2. Efectos y consecuencias	a. Salud física b. Salud psicológica
	3. Tipos de violaciones	a. Intrafamiliar b. Inconscientes
	4. Características del agresor	a. El delincuente sexual b. El agresor sexual

CAPÍTULO III

MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

Por su finalidad y naturaleza la presente investigación se encuentra dentro del tipo sustantiva, con la finalidad de explicar la problemática social del aborto por violación sexual y los obstáculos legales que existen para las víctimas que deciden interrumpir su embarazo no deseado.

3.1.1. Enfoque

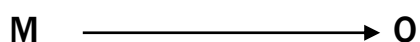
El enfoque utilizado en la presente investigación fue cuantitativo, con el objetivo de establecer relaciones causales que fundamenten los motivos legales por las cuales se debe despenalizar el aborto en casos de violación sexual, para tal efecto se ha utilizado el Reporte Estadístico de casos de violencia sexual atendidos por el Centro Emergencia Mujer de Tingo María del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como herramienta básica para el análisis de datos.

3.1.2. Alcance o Nivel

El nivel de investigación que se utilizó será explicativo, en la medida que contribuirá a la construcción de conocimientos sobre los fundamentos legales para permitir despenalizar el aborto en casos de violencia sexual; así como responderá los eventos físicos o sociales, que vienen sucediendo actualmente en nuestra realidad con las víctimas de violación sexual frente a un embarazo no deseado.

3.1.3. Diseño

El diseño de investigación que se utilizó es descriptivo simple, ya que se investigó y recogió información en campo para la toma de decisiones sobre los testimonios de los familiares de las víctimas, el cual tuvo como propósito medir las variables y proporcionar su descripción; proporcionando un panorama del estado de las variables en un momento determinado. En ese sentido nuestro diseño esquemático fue el siguiente:



Dónde:

M = Muestra.

O = Representa las variables de violación sexual y despenalización del aborto.

3.2. Población y Muestra

3.2.1. Población

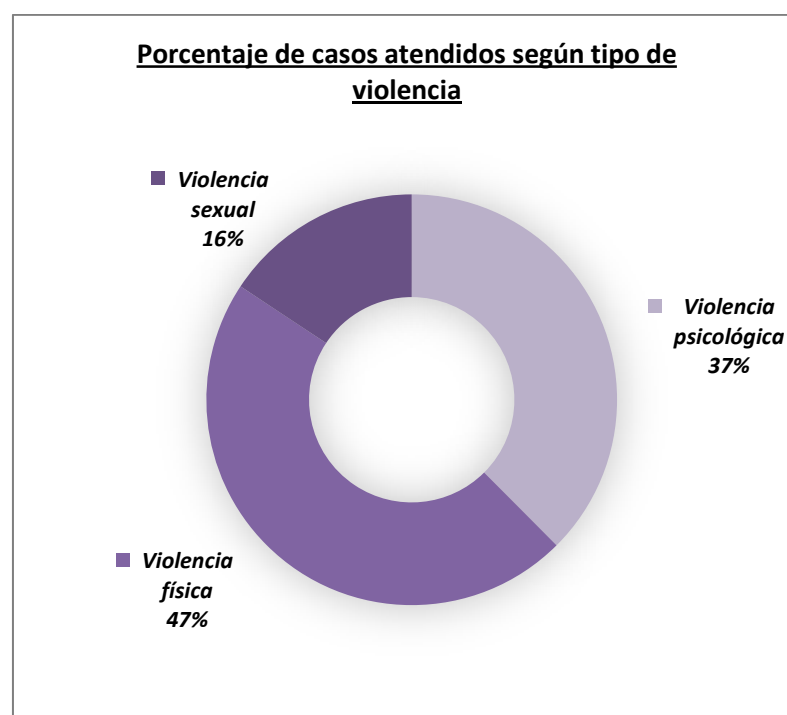
La población de estudio en la presente investigación estuvo constituida por el número total de 121 víctimas de violencia sexual, cuya características y condiciones sociales se encuentran en el Reporte Estadístico de casos de violencia sexual atendidos por el Centro Emergencia Mujer (CEM) de Tingo María durante el periodo 2015 - 2016.

Periodo: 2015

Casos de violencia familiar y sexual por el CEM, según grupo de edad y tipo de violencia

Mes	Total casos	Niños, niñas y adolescentes (Menores de 18 años)		Personas adultas (18 a 59 años)	
		Violencia psicológica / física	Violencia sexual(*)	Violencia psicológica / física	Violencia sexual(*)
Ene	15	0	7	8	0
Feb	29	2	2	25	0
Mar	30	2	7	21	0
Abr	16	0	4	12	0
May	23	2	2	17	2
Jun	23	0	1	20	2
Jul	23	3	3	17	0
Ago	23	3	3	17	0
Set	24	3	3	18	0
Oct	28	6	2	20	0
Nov	39	2	3	32	2
Dic	39	1	7	30	1
Total	312	24	44	237	7

Fuente: Reporte estadístico de casos de violencia sexual atendidos por el CEM de Tingo María
Elaboración: Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento



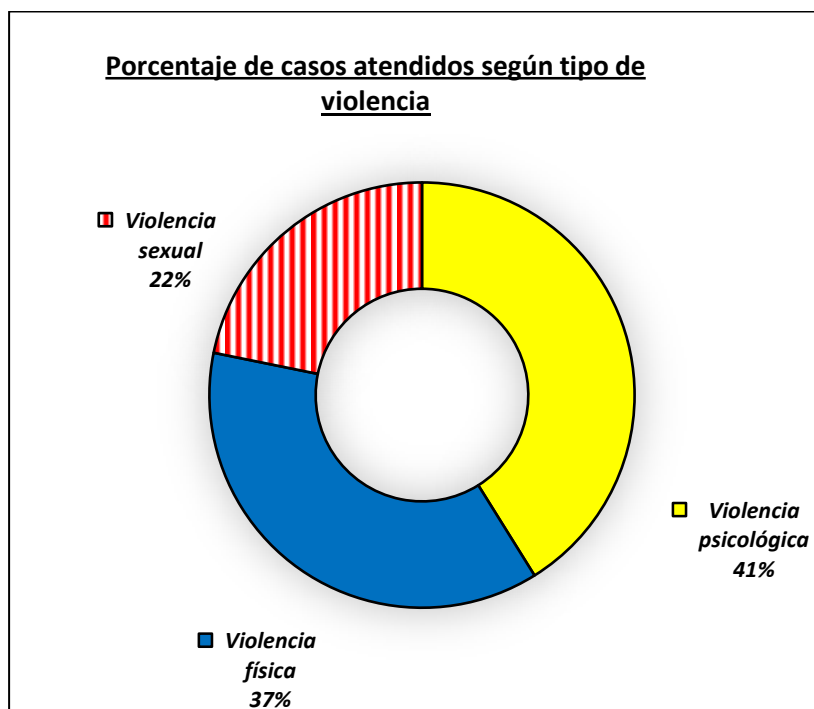
(*) En este periodo del 2015, se tuvieron 51 víctimas de violencia sexual de las cuales 02 quedaron embarazadas producto de la violación.

Periodo: 2016

Casos de violencia familiar y sexual por el CEM, según grupo de edad y tipo de violencia

Mes	Total casos	Niños, niñas y adolescentes (Menores de 18 años)		Personas adultas (18 a 59 años)	
		Violencia psicológica / física	Violencia sexual(*)	Violencia psicológica / física	Violencia sexual(*)
Ene	22	2	5	15	0
Feb	21	3	8	9	1
Mar	33	1	6	24	2
Abr	25	2	1	22	0
May	33	4	4	25	0
Jun	31	4	8	17	2
Jul	31	2	5	21	3
Ago	28	3	9	11	5
Set	41	8	7	26	0
Oct	42	9	2	29	2
Nov	0	0	0	0	0
Dic	0	0	0	0	0
Total	307	38	55	199	15

Fuente: Reporte estadístico de casos de violencia sexual atendidos por el CEM de Tingo María
Elaboración: Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento



(*) En este periodo del 2016, se tuvieron 70 víctimas de violencia sexual de las cuales 11 quedaron embarazadas producto de la violación.

3.2.2. Muestra

El tamaño de la muestra para la presente investigación fue de tipo estratificado, por lo que se trabajó con 40 víctimas abusadas sexualmente, siendo que durante la ejecución del proyecto se encontró a trece víctimas que resultaron embarazadas producto de la violación, por ese motivo las veintisiete víctimas no estuvieron considerados como muestra de estudio; sin embargo para efectos de no perjudicar el tamaño de la muestra se trabajó con los ciudadanos encuestados, esto en base al reporte proporcionado por el Centro Emergencia Mujer de Tingo María.

Unidad de análisis de la muestra	Periodo Año 2015	Periodo Año 2016	Sub Total
Niños, niñas y adolescentes (Menores de 18 años gestantes)	2	9	11
Personas adultas (18 a 59 años gestantes)	0	2	2
		Total	13 Gestantes

Fuente: Observación directa 2015-2016.
Elaboración: Investigador

Del total de 121 mujeres que fueron víctimas de violación sexual en el periodo 2015 - 2016, trece resultaron embarazadas productos de la agresión, cantidad que equivale al 10.74% de víctimas. Lo que significa que prácticamente de cada 09 mujeres que son víctimas de violación sexual, una está siendo embarazada contra su voluntad.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1. Para la recolección de datos

Análisis del Registro Documental: Esta técnica sirvió para el análisis doctrinario y teórico del contenido de las diversas obras, así como de los variables libros y jurisprudencias que han sido objeto de estudio.

En ese sentido, se utilizaron los siguientes instrumentos:

Técnicas	Instrumentos
- Fichaje	- Fichas de registro - Fichas textuales
- Encuesta	- Cuestionario

a) Instrumentos bibliográficos:

- Fichas de registro o localización (bibliográficos) e internet.
- Fichas de investigación (resumen, textuales y de comentario).

b) Instrumentos de campo:

El Cuestionario: Este instrumento se aplicó en función al problema planteado, la hipótesis y las variables identificadas, para lo cual se elaboró un cuestionario de diez preguntas cerradas que estaban dirigidos a las víctimas y a la ciudadanía civil, se empleó con el propósito de recoger información en campo sobre la realidad actual que vienen atravesando las mujeres víctimas de violación sexual.

Técnica de Encuesta: Esta técnica permitió recoger información sobre la opinión y testimonio de aquellas mujeres que fueron víctimas de violación sexual y que producto de tal abuso quedaron embarazadas, no pudiendo interrumpir su gestación por temor a una sanción penal.

3.3.2. Para la presentación de datos

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos como el cuestionario y el fichaje, se procedió al conteo y al análisis respectivo a través de la estadística descriptiva, considerando la frecuencia y el porcentaje simple; pasándose a realizar la interpretación a partir de nuestro marco teórico y de los mismos resultados, para este proceso se utilizó las tablas y gráficos en forma de torta.

La información clasificada y almacenada en la matriz de datos del Reporte Estadístico de casos de violencia sexual atendidos por el Centro Emergencia Mujer de Tingo María se trasladó a un procesador de sistema computarizado que permitió realizar las técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se tuvo en cuenta el diseño y las diversas pruebas utilizadas. Para la comunicación de los resultados se utilizaron los cuadros de distribución estadística y los gráficos estadísticos simples.

3.3.3. Para el análisis e interpretación de los datos

Los resultados cuantitativos y cualitativos que obtuvimos de las diversas pruebas estadísticas y de cuestionario, han servido para conocer el nivel de aceptación o rechazo para despenalizar el aborto por violación, mismos que fueron observados desde la hipótesis del trabajo operacional, lo cual me ha permitido realizar el análisis e interpretación del nivel científico que fundamentó los resultados parciales y finales.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Procesamiento de datos

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación a través de tablas y gráficos de la estadística descriptiva.

4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de los cuestionarios aplicados a las víctimas y a la ciudadanía.

En la investigación realizada para aplicar el cuestionario se ha realizado un total de diez preguntas, el cual estaba debidamente relacionada con los objetivos y el problema de investigación. Si bien, se proyectó realizar una muestra con cuarenta víctimas, pero durante la ejecución de la tesis y la recopilación de información estadística del Centro Emergencia Mujer - Tingo María, se encontró a trece víctimas gestantes producto de la violación sexual, durante el periodo 2015-2016, por ese motivo las veintisiete muestras formaron parte de la ciudadanía civil.

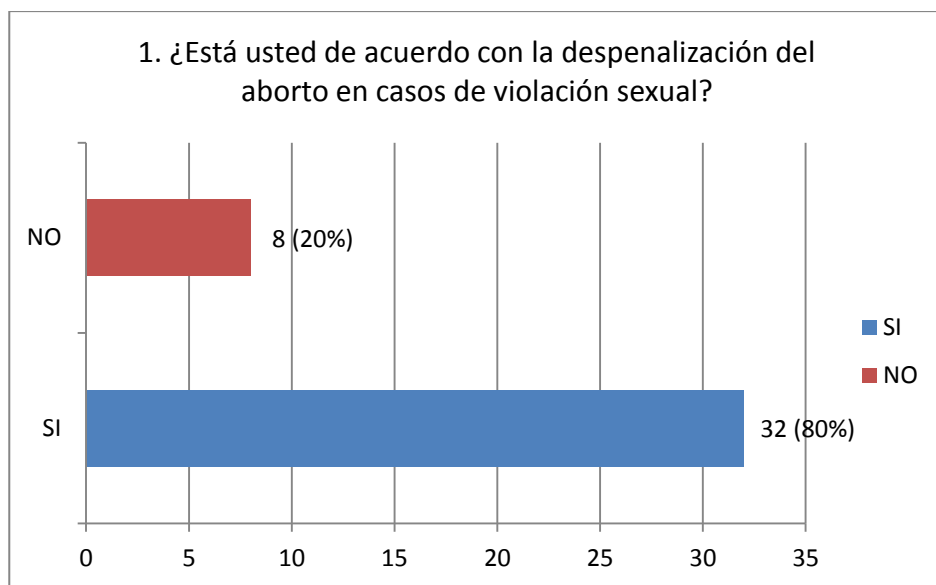
Tabla que contiene la totalidad del grupo de la muestra.

Sujetos de la muestra	Frecuencia	Porcentaje
Víctimas	13	32,5
Ciudadanía	27	67,5
Total	40	100 %

Fuente: Archivos según la encuesta realizada
Elaboración: Investigador

Tabla N° 01

	Encuestados	Porcentaje
SI	32	80
NO	8	20
Total	40	100 %



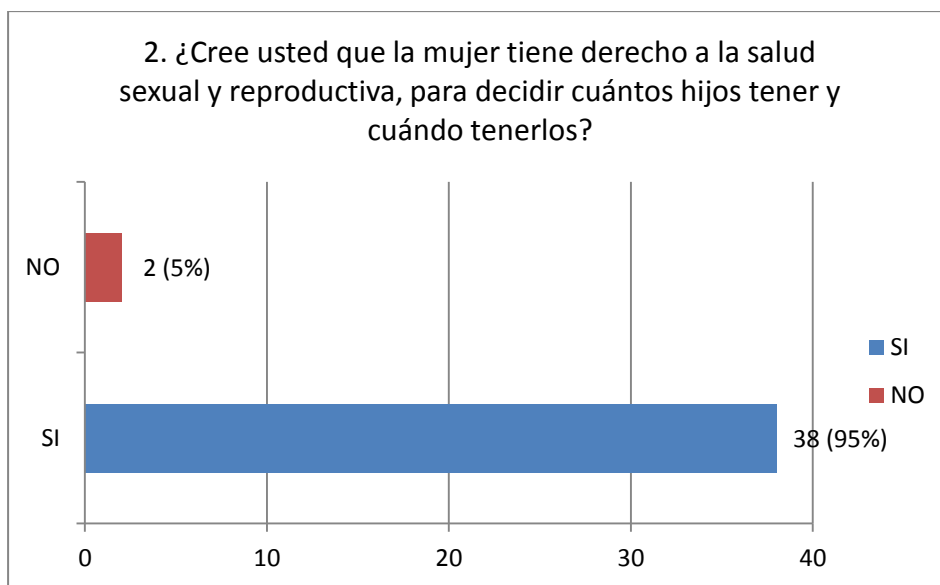
Interpretación:

En el presente grafico se puede observar que de los 40 encuestados, 32 ciudadanos y ciudadanas sostuvieron que si están de acuerdo con la despenalización del aborto por violación sexual, lo que significa que el 80% del total de encuestados están a favor. Sin embargo, solo un 20%, equivalente a 08 encuestados, manifestaron estar en desacuerdo.

En ese sentido, podemos advertir que un porcentaje mayor de la ciudadanía si estarían a favor de la despenalización del aborto cuando se tratan de hechos de violencia sexual.

Tabla N° 02

	Encuestados	Porcentaje
SI	38	95
NO	2	5
Total	40	100 %



Interpretación:

En el presente grafico se puede observar que 38 ciudadanos y ciudadanas encuestados sostienen que si están de acuerdo que la mujer tiene derecho a la salud sexual y reproductiva para decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, cantidad que representa el 95% del total de encuestados. En contra partida, solo un 5%, equivalente a 02 encuestados, manifestaron estar en desacuerdo.

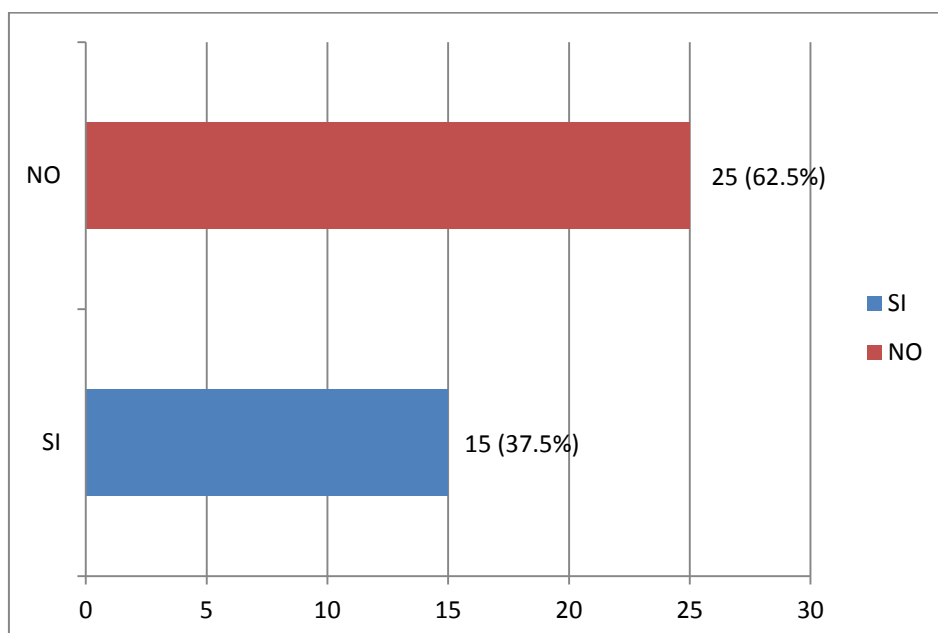
Como se ha mostrado en este grafico existe un porcentaje alto de la ciudadanía que reconoce que la mujer tiene el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y por ende se considera que tenga el acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Tabla N° 03

	Encuestados	Porcentaje
SI	15	37.5
NO	25	62.5
Total	40	100 %

3. ¿Considera que el derecho constitucional establecido en el artículo 2° inciso 1° debe prevalecer sobre el derecho al aborto por violación sexual?

Este artículo de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho: “A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.

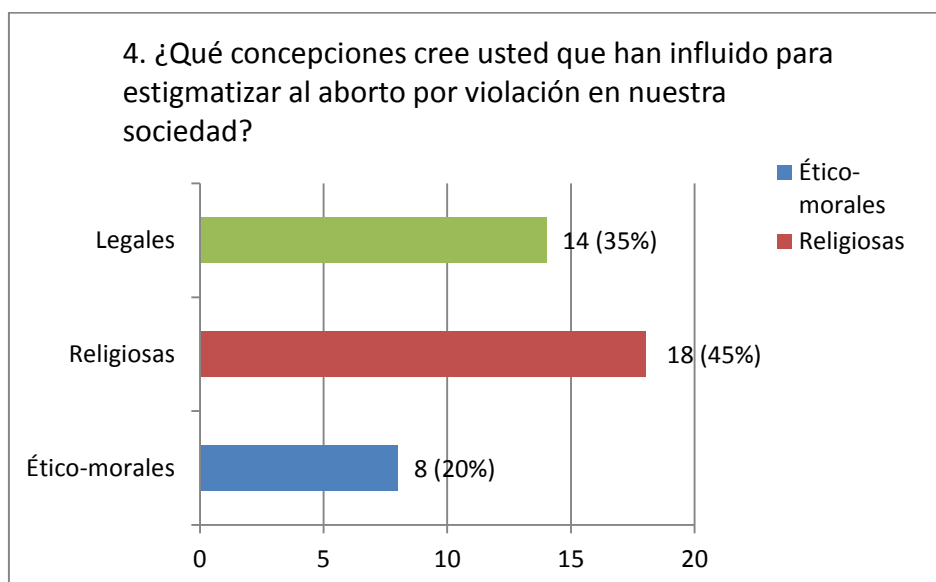


Interpretación:

En el presente grafico se observa que de las 40 personas encuestadas, 25 manifestaron no estar de acuerdo que el derecho a la vida y del concebido deba prevalecer frente a la decisión de las víctimas para abortar en casos de violación, esta cantidad representa el 62.5%. Por el contrario solo un 37.5%, señaló que el concebido tiene el derecho a la vida desde la concepción.

Tabla N° 04

	Encuestados	Porcentaje
Ético-morales	8	20
Religiosas	18	45
Legales	14	35
Total	40	100 %



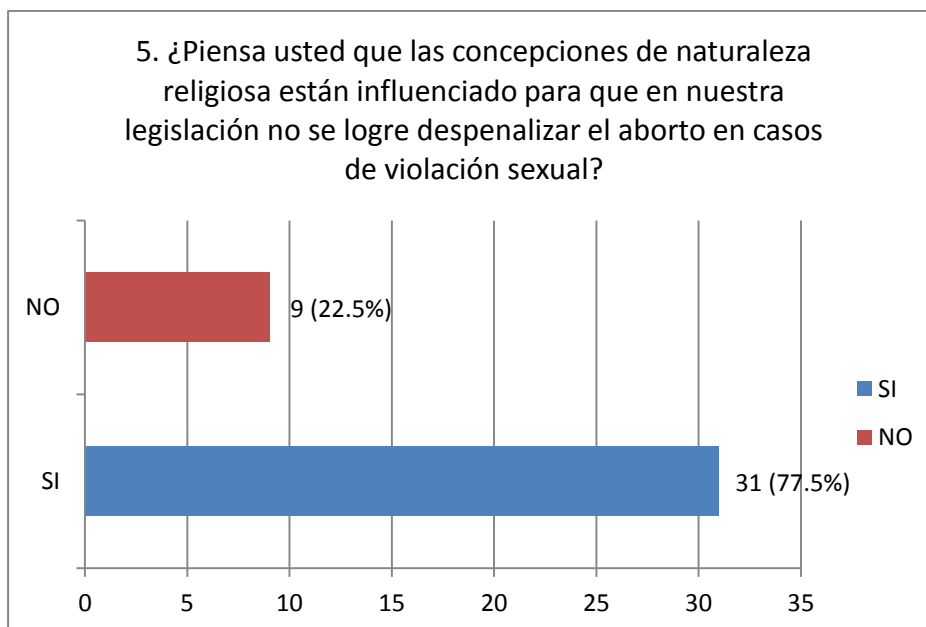
Interpretación:

En el presente grafico se puede observar que de las 40 personas encuestadas, 18 personas manifestaron que las concepciones religiosas han mediado para estigmatizar al aborto en nuestra sociedad, cantidad que representa el 45% del total de encuestados. Además un 35%, equivalente a 14 encuestados, manifestaron que fueron concepciones legales. En cambio, un 20%, que representa a 08 encuestados señalaron que estas prácticas abortivas fueron por creencias éticos morales.

Como es de verse, para estigmatizar al aborto en nuestra sociedad; según los encuestados, han influido mayormente concepciones de tipos religiosas y legales, siendo la primera una verdadera fuerza para las autoridades; y para la sociedad en general.

Tabla N° 05

	Encuestados	Porcentaje
SI	31	77.5
NO	9	22.5
Total	40	100 %



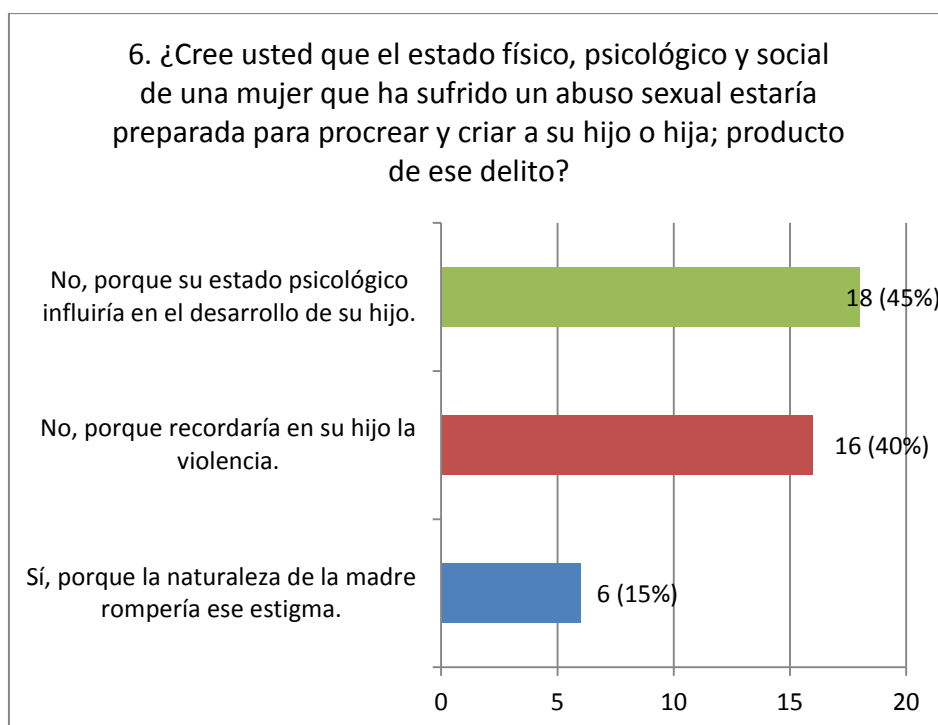
Interpretación:

En este grafico se observa que del total de personas encuestadas, 31 personas manifestaron que actualmente las concepciones religiosas vienen influenciado en nuestra legislación para que el aborto por violación sexual no se logre despenalizar, cantidad que representa el 77.5% del total de encuestados. En contrapartida un 9%, equivalente a 9 encuestados, manifestaron que no habría mucha influencia religiosa, si no que más era un tema político.

En esa línea, debo precisar que el aborto no es un tema partidario, ni ideológico, ni religioso, sino de derechos humanos, por lo que es necesario sustentar con base científica y jurídica la despenalización del aborto, dejando de lado los prejuicios y las ideas preconcebidas.

Tabla N° 06

	Encuestados	Porcentaje
No, porque recordaría en su hijo la violencia.	16	40
Sí, porque la naturaleza de la madre rompería ese estigma.	6	15
No, porque su estado psicológico influiría en el desarrollo de su hijo.	18	45
Total	40	100 %

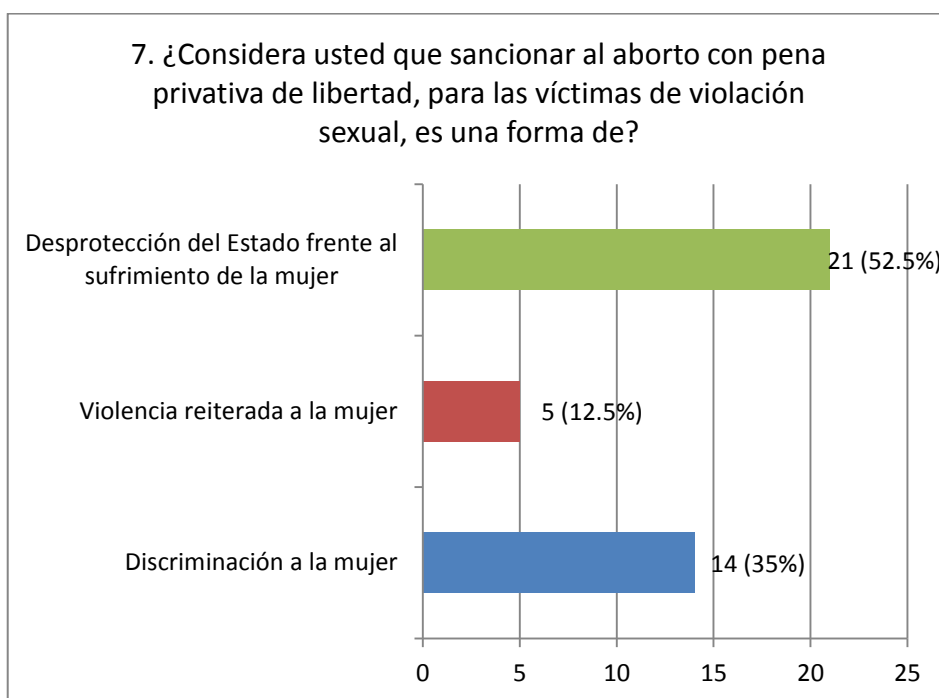


Interpretación:

Aquí podemos ver que de las personas encuestadas, 18 personas manifestaron que el estado físico, psicológico y social de la víctima no estaría preparada dar a luz y criar a su hijo, ya que su estado psicológico influiría en su hijo o hija, cantidad que representa el 45% del total de encuestados. Asimismo el 40 %, es decir 16 personas, manifestaron que no estaría preparada porque recordaría en su hijo la violencia. Solo el 15% señaló que si estaría apta en procrear y criar pues su naturaleza de madre rompería el estigma.

Tabla N° 07

	Encuestados	Porcentaje
Discriminación a la mujer	14	35
Violencia reiterada a la mujer	5	12.5
Desprotección del Estado frente al sufrimiento de la mujer	21	52.5
Total	40	100 %

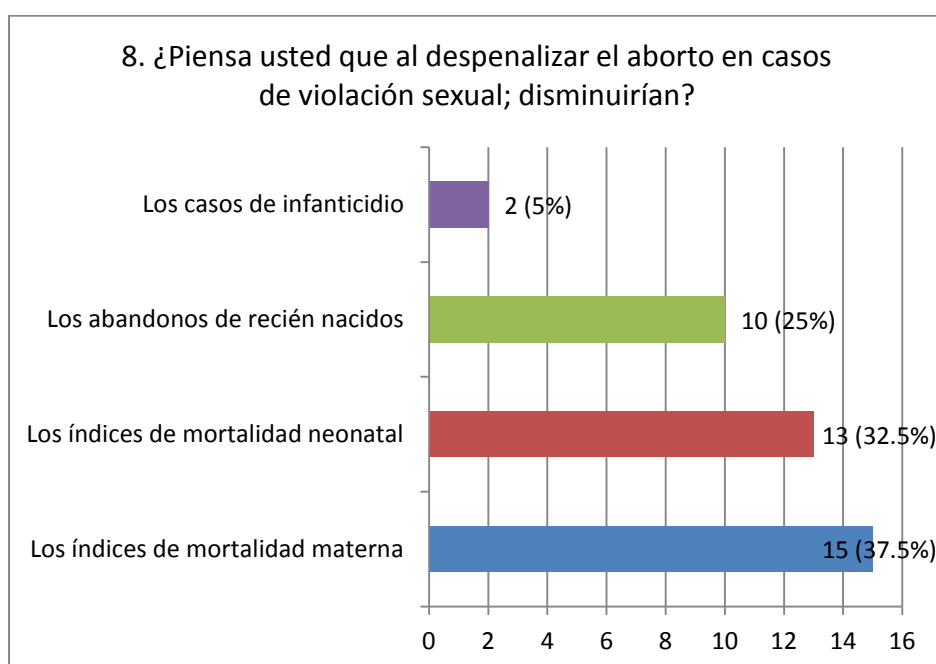


Interpretación:

En este grafico podemos ver que de las personas encuestadas, 21 manifestaron que sancionar al aborto con pena privativa de libertad a las víctimas de violación sexual, es una forma de desprotección del Estado frente al sufrimiento de la mujer, cifra que representa el 52.5% de los encuestados. Asimismo el 35 %, es decir 14 personas, manifestaron que sancionar al aborto sería una forma de discriminación a la mujer. Por último, el 12.5 % señaló que sancionar al aborto a victimas también configuraría una forma de violencia reiterada contra la mujer.

Tabla N° 08

	Encuestados	Porcentaje
Los índices de mortalidad materna	15	37.5
Los índices de mortalidad neonatal	13	32.5
Los abandonos de recién nacidos	10	25
Los casos de infanticidio	2	5
Total	40	100 %

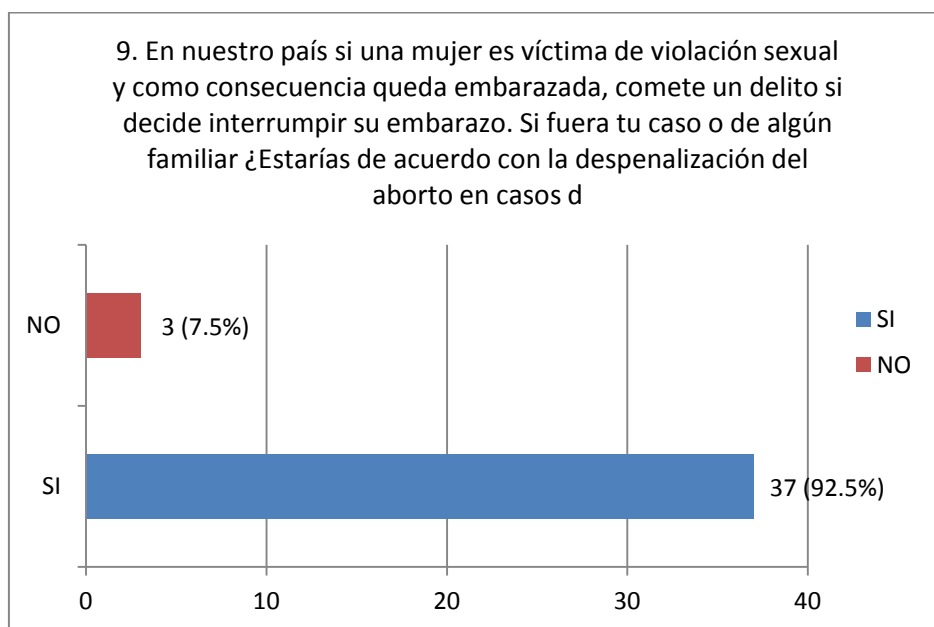


Interpretación:

En este grafico podemos ver que del total de personas encuestadas, 15 personas señalaron que al despenalizar el aborto en casos de violación sexual disminuirán los índices de mortalidad materna, cantidad que representa el 37.5% del total de encuestados. Asimismo el 32.5 %, es decir 13 personas, dijeron reduciría la mortalidad neonatal, y el 25% indicó que bajarían los índices de abandonos de recién nacidos. Por último el 5 %, es decir 2 personas señalaron que al despenalizar el aborto en casos de violación sexual reducirían los casos de infanticidio.

Tabla N° 09

	Encuestados	Porcentaje
SI	37	92.5
NO	3	7.5
Total	40	100 %



Interpretación:

En el presente grafico se puede observar que del total de personas encuestadas, 37 personas señalaron estar de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación sexual, con mayor razón si se trataran algún caso familiar, cantidad que representa el 92.5% del total de encuestados. En contrapartida, solo un 3%, equivalente a 03 encuestados, manifestaron estar en desacuerdo.

Tabla N° 10

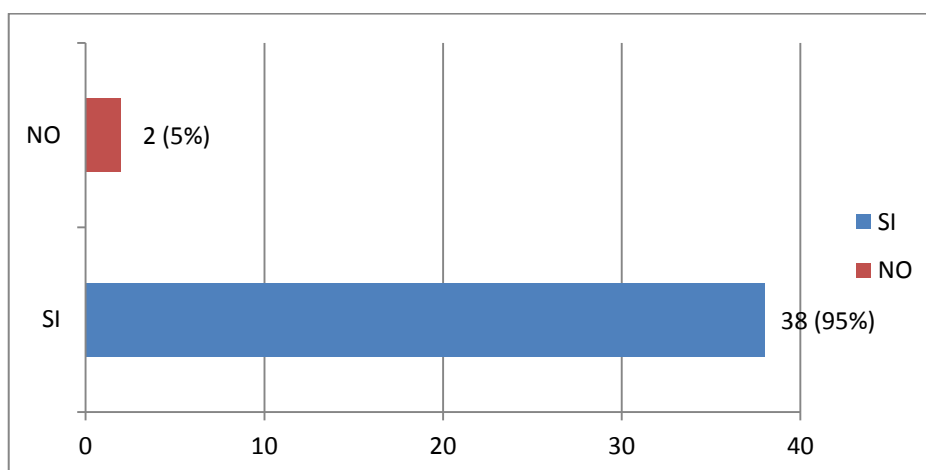
	Encuestados	Porcentaje
SI	38	95
NO	2	5
Total	40	100 %

10. Estaría usted de acuerdo que se modifique el artículo 119° del Código Penal vigente; en los términos siguientes:

Artículo 119.- No será punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o su representante legal en los siguientes casos:

1. Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente;
2. Cuando el embarazo sea consecuencia de un acto de violación sexual.
3. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, certificada por un médico.

Si se tratase de una persona menor de 14 años, el consentimiento será prestado por su representante legal.



Interpretación:

En el presente grafico se puede observar que del total de personas encuestadas, 38 personas señalaron que están de acuerdo con la modificación del artículo 119° del Código Penal, especialmente cuando el embarazo sea consecuencia de un acto de violación sexual, cantidad que representa el 95% del total de encuestados. En contrapartida, solo tenemos un 5%, equivalente a 2 encuestados, quienes manifestaron estar en desacuerdo con la despenalización del aborto por violación.

4.2. Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis

Habiéndose formulado como objetivo de la presente investigación, el de determinar y analizar los fundamentos técnicos y jurídicos para la despenalización del aborto en casos de violación sexual, se puede decir que a la luz de los resultados de la tabla N° 01 se evidencia que el 80 % de los encuestados han sostenido que si están de acuerdo que se debería despenalizar el aborto por violación sexual.

Asimismo, en la tabla N° 02 vemos que el 95 % de los encuestados están de acuerdo que la mujer tiene el intrínseco derecho a la salud sexual y reproductiva para decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, en virtud a su libertad sexual y a su dignidad. Más aun cuando en la tabla N° 07, se evidencia que el 52.5 % de encuestados señalaron que sancionar al aborto con pena privativa de libertad, es una forma de desprotección y discriminación del Estado hacia la mujer.

En cuanto a los resultados de los objetivos específicos cabe señalar que efectivamente nuestro Código Penal en cuanto a los criterios técnicos y jurídicos que sustenten la despenalización del aborto por cuestiones de violación sexual están reconocidos constitucionalmente en los derechos sexuales y reproductivos, por eso debemos saber que obstaculizar el aborto en estos casos, fortalece el estereotipo de género en donde las mujeres son reconocidas como objetos sexuales y medios de reproducción a quienes no se les reconoce de modo efectivo sus derechos.

Nuestro país registra una de las tasas estadísticas de violencia sexual contra las mujeres más altas en Sudamérica. En los últimos años se han registrado más de 63,545 denuncias por violación sexual, donde las víctimas son en la mayoría mujeres, adolescentes y niñas. Esto se debe al gran número de barreras de tipo legal, educativo, de acceso a la información y cultural que todavía existen en nuestro país, además las mujeres y niñas tienen un acceso limitado a los servicios de salud reproductiva.

Por tanto, lo formulado en mi hipótesis si se encuentran aceptadas en esta investigación por cuanto el marco teórico y los resultados obtenidos nos otorga sustento para aceptarlo tal como ha sido planteado ya que las consideraciones jurídicas para la despenalización del aborto por violación sexual se fundamentan en el derecho a la libertad sexual y reproductiva, además estos derechos están reconocidos a favor de la mujer internacionalmente tal como ha señalado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su Dictamen aprobado por el Comité el 17 de octubre de 2011, señalando que el Estado Peruano debe revisar nuestra legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Contrastación de los resultados del trabajo de investigación

La presente investigación presenta en sus bases teóricas fundamentalmente varios enfoques de derechos humanos de la mujer para la legalización del aborto por violación; además, de la contrastación y las teorías revisadas sobre la problemática social sobre la despenalización del aborto por cuestiones de violencia sexual, se puede confirmar que los fundamentos técnicos y jurídicos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual son el derecho a la libertad sexual y reproductiva que amparan y protegen la decisión de abortar frente a embarazos no deseados. Asimismo, actualmente se viene presentando debates y proyectos de ley a nivel constitucional ante el Parlamento de la Republica de nuestro país, a pesar de que anteriormente la Comisión de Constitución rechazó el proyecto de despenalización del aborto en casos de violación, inseminación o transferencia de óvulos no consentida.

El aborto por violación sexual no puede ser confundido con el aborto terapéutico. Desde el punto de vista estrictamente médico, ese aborto no equivale a salvar una vida en riesgo. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, así dice la Constitución. Lo decía, también, en la Carta del 1979. Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Artavia Murillo vs. Costa Rica*, en el

fundamento sobre la Controversia de la alegada pérdida embrionaria señaló que: (...), la Corte encontró desproporcionado pretender una protección absoluta del embrión respecto a un riesgo que resulta común e inherente incluso en procesos donde no interviene la técnica de la FIV.

En ese caso, El Tribunal compartió el concepto del perito Zegers-Hochschild según el cual es fundamental, desde una perspectiva biomédica, diferenciar lo que significa proteger el derecho a la vida de lo que significa garantizar el derecho a la vida de estructuras celulares que se rigen por una matemática y una biología que trasciende cualquier regulación social o jurídica. Lo que corresponde a las instituciones responsables de las (técnicas de reproducción asistida), es proveer a las estructuras celulares (gametos y embriones) de las mejores condiciones con que cuenta el conocimiento médico y científico para que la potencialidad de ser persona, pueda expresarse al nacer [...]”. El Tribunal reitera que, precisamente, uno de los objetivos de la FIV es contribuir con la creación de vida (...).”

En síntesis, la Corte ha concluido en este caso que la Sala Constitucional incurrió en una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia. Asimismo, esta interferencia tuvo efectos discriminatorios.

En ese sentido, si queremos legalizar el aborto por violación sexual, el Congreso de la Republica debe de una vez adoptar las medidas legislativas necesarias para aprobar los proyectos de leyes presentados o en todo caso plantearse una reforma constitucional.

Por otro lado, debemos estar conscientes que una violación sexual adicionada el embarazo produce dos víctimas: la mujer violentada en su cuerpo y en su libertad y, además, el concebido en su entera dependencia y fragilidad. El daño que produce una violación es tremendo; el efecto de un embarazo por tal causa, inimaginable. Por ello, en un Estado Constitucional de Derecho, la ley debe responder por los derechos de todos y todas.

Por otro lado, si bien es cierto nuestro Código Penal vigente regula en el artículo 120° sobre el aborto sentimental o eugenésico que sanciona con pena privativa de libertad no mayor de tres meses, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente.

Si analizamos bien este articulo podremos apreciar que la Ley ha establecido una penalidad cuyo quantum es de tres meses, diremos que en la práctica dicha sanción se puede convertir en una forma de impunidad por prescripción de la acción penal para este tipo de delitos,

pues según nuestro ordenamiento procesal vigente un proceso penal sumario tiene una duración de ciento veinte (120) días que puede ser ampliado por sesenta días por causas justificadas, lo que en la práctica vendría a ser los seis meses. Por esto es evidente que este delito del aborto sentimental requiere de un serio replanteamiento sobre su relevancia político criminal y su eventual despenalización o descriminalización.

Por estas consideraciones, el embarazo no deseado que no logra transformarse en una maternidad gratificante, marca psicológicamente a la mujer y deja secuelas en los hijos. Embarazarse y dar a luz son sucesos que transforman totalmente la vida de una mujer, especialmente desde el punto de vista psicoafectivo, de allí la importancia de que el embarazo y la maternidad consecuente, sean el fruto de un acto voluntario, libremente decidido y no producto de una imposición mucho menos el resultado de la intolerable intromisión del Estado en la vida de las mujeres.

CONCLUSIONES

1. Se ha determinado con un 95% de acierto, que los fundamentos jurídicos para la despenalización del aborto en casos de violación sexual están reconocidos en el derecho a la libertad sexual y reproductiva que amparan la decisión de la mujer para abortar frente a embarazos no deseados.
2. Se ha identificado un total de 121 mujeres víctimas de violación sexual en el periodo 2015 - 2016, de los cuales 13 resultaron embarazadas productos de la agresión el cual equivale al 10.74% de la población de víctimas, quienes incluso tuvieron que continuar con su gestación por temor a una sanción penal en la provincia de Leoncio Prado.
3. Se ha determinado con un 95% de aceptabilidad, que la modificación del artículo 119° del Código Penal; respecto a la despenalización del aborto en casos de violación sexual es justo y necesario, por lo tanto su eventual despenalización permitirá e influenciará significativamente para reducir la mortalidad materna y neonatal en las víctimas de violación sexual.
4. Finalmente, para tomar decisiones en sexualidad y reproducción libres de coerción y violencia, resulta esencial un enfoque de derechos humanos, considerando que los derechos sexuales y reproductivos son de todas las personas para el disfrute de una ciudadanía plena y para que las democracias sean verdaderas, de modo que, las personas puedan tener el pleno derecho a decidir sobre sus propios proyectos de vida.

RECOMENDACIONES

1. A partir de la presente investigación, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República debe aprobar los proyectos de ley presentados y modificar las leyes penales a favor del aborto en los casos de embarazos a consecuencias de una violación sexual, en la medida que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el derecho a la procreación libre, consciente y responsable mediante el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
2. Respetar el derecho de la mujer embarazada a decidir abortar en caso de una violación sexual. Negar a la víctima el derecho a decidir en estos casos representa una reiteración de la violencia sexual sufrida, una revictimización inadmisible e incompatible con el respeto debido a los derechos humanos.
3. Las Redes de Salud, deben garantizar eficientemente el acceso a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes mujeres, así como las Unidades de Gestión Educativa Local deben asegurar la impartición de una Educación Sexual Integral para la construcción de conocimientos sólidos que desarrollen capacidades sobre educación sexual y reproductiva.
4. El Estado peruano, debe cumplir estrictamente con las disposiciones de la Convención y la Recomendación General N° 24 del Comité CEDAW, respecto a la “revisión de la legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **ALCACER GUIRAO, Rafael.** (2004) Lesión de bien jurídico o lesión de deber: apuntes sobre el concepto material del delito" Lima. Grijley.
2. **ALEXY, Robert.** (1997) Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
3. **BARATTA, Alessandro.** (1985) Integración-Prevención: Una Nueva fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica. En: Revista Doctrina Penal N° 29. Buenos Aires.
4. **BELOFF, Mary.** (1993) Determinación judicial de la pena. Buenos Aires: Editores del Puerto.
5. **BENTHAM, Jeremy.** (1973) "An introduction to the principles of morals and legislation". Hafnew. New York.
6. **CARLYLE, A.J.** (1967) Los fines del derecho, bien común, justicia y seguridad por Le Fur, Delos, Radbruch, Carlyle". Editorial Universitaria. México, D.F.
7. **CARVAJAL CORDÓN, Julián.** (1999) Coordinador. "Moral, derecho y política en Immanuel Kant". Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca.
8. **CRUZ PRADOS, Alfredo** (1991) Historia de la filosofía contemporánea". EUNSA. Pamplona.
9. **DEL CASTILLO MURRUGARRA, Victoria.** (1976) "El aborto: su legalización en el Perú". Raiz. Lima.

10. **ESCRIBENS, P.** (2012). Milagros y la violencia del conflicto armado interno. Una maternidad forzada. Lima: DEMUS.
11. **MENDOZA, Celina Lertora y FERNÁNDEZ LEMOINE, María Rosa.** (1995) "Aborto un Problema a Discutir". Buenos Aires
12. **CASTILLO ALVA, J. L.** (2005). El delito de Aborto. Lima: ARA Editores.
13. **COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.** (2004). *Recomendación general N° 25 sobre medidas especiales de carácter temporal.* Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra La Mujer.
14. **COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.** (2014). *Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.* Revisión del CIPD Más allá del 2014.
15. **ENDES.** (2016). *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.* Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
16. **MUJICA, J.** (2011). *Violaciones Sexuales en el Perú 2000 - 2009, Un informe sobre el estado de la cuestión.* Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex.
17. **OBSERVACIONES FINALES SOBRE PERÚ, C.** (2014). *Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014.* Ginebra: Observaciones Finales sobre Perú.
18. **GAMARRA HERRERA, Ronald y otros.** (Noviembre 2015, p. 34) Estudio sobre las causas de la prevalencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en las provincias peruanas de Huánuco y Leoncio Prado. Huánuco: Paz y Esperanza.

ANEXOS

(Matriz de consistencia y cuestionario)

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2015 - 2016.

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	INSTRUMENTOS	DISEÑO	POBLACION/ MUESTRA
Problema General ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos para la despenalización del aborto en casos de violación sexual, en el ordenamiento jurídico peruano, provincia de Leoncio Prado 2015 – 2016?	Objetivo General Determinar y analizar los fundamentos técnicos y jurídicos para la despenalización del aborto en casos de violación sexual, en el ordenamiento jurídico peruano, de la provincia de Leoncio Prado 2015 – 2016.	Hipótesis General Los fundamentos técnicos y jurídicos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual son el derecho a la libertad sexual y la autodeterminación reproductiva que amparan y protegen la decisión de abortar frente a embarazos no deseados, provincia de Leoncio Prado 2015 - 2016.	Variable Independiente Violación sexual.	1. El Aborto 2. Excepción al delito del aborto.	-Situación actual. -Regulación jurídica. -Aborto terapéutico. -Riesgo en la salud o la vida de la mujer. -Iniciativa legislativa ciudadana. -Modificatoria del artículo 119° del Código Penal.	INSTRUMENTOS: Técnica: - Fichaje - Encuesta Instrumento: - Fichas de registro. - Fichas textuales. - Cuestionario	El tipo de investigación es Sustantiva, con enfoque Cuantitativo de nivel Explicativo; cuyo diseño Descriptivo es: M → O M = muestra O = son las variables de violación sexual y despenalización del aborto.	POBLACIÓN: Está constituida por 121 víctimas de violencia sexual, registrados en el Reporte Estadístico de Casos del Centro de Emergencia Mujer de Tingo María, 2015-2016. MUESTRA: Se trabajó con 40 víctimas de violencia sexual, cuyo resultado de investigación se encontró a 13 víctimas que resultaron embarazadas producto de la violación sexual.
Problemas Específicos a) ¿Cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la despenalización del aborto en casos de violación sexual en la administración de justicia, de la provincia de Leoncio Prado? b) ¿Cuántas mujeres víctimas de embarazos no deseados, producto de una violación sexual, tuvieron que continuar con su embarazo y dar a luz por temor a una sanción penal en la provincia de Leoncio Prado? c) ¿Qué alternativas de solución se deberían proponer al Congreso de la República para modificar el artículo 119° del Código Penal, respecto a la despenalización del aborto por violación sexual?	Objetivos Específicos a) Analizar e identificar los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la despenalización del aborto en casos de violación sexual en la administración de justicia de la provincia de Leoncio Prado. b) Identificar la cantidad de víctimas de violación sexual embarazadas que tuvieron que continuar con su gestación y dar a luz por temor a una sanción penal en la provincia de Leoncio Prado. c) Proponer alternativas de solución al Congreso de la República para modificar el artículo 119° del Código Penal, respecto a la despenalización del aborto en casos de violación sexual.	Hipótesis Específicas a) El derecho a la libertad sexual y reproductiva es el fundamento técnico jurídico constitucional que ampara a las víctimas de violación sexual frente a vulneración de sus derechos reproductivos que las afectan al momento de decidir abortar. b) Las víctimas de violación sexual con embarazos no deseados vienen siendo desamparadas por parte del Estado al momento que las víctimas deciden optar por interrumpir su embarazo. c) La modificación del artículo 119° del Código Penal permitirá despenalizar el aborto e influenciará significativamente para reducir la mortalidad materna y neonatal en las víctimas de violación sexual.	Variable Dependiente Despenalización del aborto.	1. Abuso sexual 2. Efectos y consecuencias 3. Tipos de violaciones 4. Características del agresor	- En adolescentes - En jóvenes y adultos. - Salud física - Salud psicológica. - Intrafamiliar - Inconscientes - El delincuente sexual - El agresor sexual.			

ANEXO N° 2

(Cuestionario)

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Introducción.- Se presenta 10 preguntas para responder en forma anónima, cuya información será utilizada académicamente para la obtención de mi título profesional. Por favor responda todas las preguntas, marcando la alternativa que crea correcta.

Marque con una (x) su respuesta:

1. ¿Está usted de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación sexual?

SI () NO ()

2. ¿Cree usted que la mujer tiene derecho a la salud sexual y reproductiva, para decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos?

SI () NO ()

3. ¿Considera usted que el derecho constitucional establecido en el artículo 2° inciso 1° debe prevalecer sobre el derecho al aborto por violación sexual?

Este artículo de la Constitución señala que toda persona tiene derecho: "A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece".

SI () NO ()

4. ¿Qué concepciones cree usted que han influido para estigmatizar al aborto por violación en nuestra sociedad?

- a) Concepciones ético-morales ()
- b) Concepciones religiosas ()
- c) Concepciones legales ()

5. ¿Piensa usted que las concepciones de naturaleza religiosa están influenciado para que en nuestra legislación no se logre despenalizar el aborto en casos de violación sexual?

SI () NO ()

6. ¿Cree usted que el estado físico, psicológico y social de una mujer que ha sufrido un abuso sexual estaría preparada para procrear y criar a su hijo o hija; producto de ese delito?

- a) No, porque recordaría en su hijo la violencia ()
- b) Si, porque la naturaleza de la madre rompería ese estigma ()
- c) No, porque su estado psicológico influiría en el desarrollo de su hijo ().

7. ¿Considera usted que sancionar al aborto con pena privativa de libertad, para las víctimas de violación sexual, es una forma de?

- a) Discriminación a la mujer ()
- b) Violencia reiterada a la mujer ()
- c) Desprotección del Estado frente al sufrimiento de la mujer ().

8. ¿Piensa usted que al despenalizar el aborto en casos de violación sexual; disminuirían?

- a) Los índices de mortalidad materna ()
- b) Los índices de mortalidad neonatal ()
- c) Los abandonos de recién nacidos ()
- d) Los casos de infanticidio ()

9. En nuestro país si una mujer es víctima de violación sexual y como consecuencia queda embarazada, comete un delito si decide interrumpir su embarazo. Si fuera tu caso o de algún familiar ¿Estarías de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación?

SI () NO ()

10. Estaría usted de acuerdo que se modifique el artículo 119° del Código Penal vigente; en los términos siguientes:

Artículo 119.- No será punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o su representante legal en los siguientes casos:

1. Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente;
2. Cuando el embarazo sea consecuencia de un acto de violación sexual.
3. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, certificada por un médico.

Si se tratase de una persona menor de 14 años, el consentimiento será prestado por su representante legal.

SI () NO ()

Gracias.

El tesista